

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyor conseller.

Interpel·lació al Consell, que contesta el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, senyor Rafael Climent González, sobre les conseqüències d'aplicar l'acord econòmic i el comerç global entre la Unió Europea i Canadà (CETA) al País Valencià, que formula el diputat senyor Daniel Geffner Sclarsky (GP Podemos-Podem) (RE número 58.123 i 58.457, BOC número 170)

La senyora vicepresidenta primera:

Anem a passar a l'últim punt de la vesprada, que és la interpel·lació al Consell sobre les conseqüències d'aplicar l'acord econòmic i de comerç global entre la Unió Europea i Canadà, el CETA, que formula el diputat Daniel Geffner, del Grup Parlamentari Podemos-Podem, i que serà substanciada també pel conseller d'Economia Sostenible.

El senyor Geffner Sclarsky:

Gràcies, senyora presidenta.

Bueno, han dejado para el final un tema sustancioso. Espero que ante la falta de audiencia lo importante es el tema no la presencia y no asistencia de las señorías y los diputados y diputadas.

Vamos a tratar un tema muy importante. El acuerdo económico y global, CETA, por sus siglas en inglés, es un macro acuerdo negociado entre la Unión Europea y Canadá. El comercio entre la Unión Europea y Canadá presenta un notable grado de liberalización con aranceles medios que rondan el 3%. No obstante, existen mayores aranceles en la Unión Europea en productos alimenticios, ciertos pescados, mariscos, carne vacuna y porcina.

Más allá de la reducción de los aranceles, que son mínimos entre Canadá y la Unión Europea, el CETA supone, y es lo más importante, una reconfiguración de todo un conjunto de normas de protección laboral del consumidor y del medio ambiente.

El CETA incluye los llamados tribunales de arbitraje, muy criticados porque representan una justicia paralela privada a medida de las grandes corporaciones. El CETA incluye la creación del foro de cooperación en materia de regulación, donde representantes de empresas corporativas acceden a textos legislativos promovidos por la Comisión Europea antes de que lleguen al parlamento europeo. El CETA incluye listas negativas, es decir, todo lo que no figura como excluido podrá liberalizarse, es decir, privatizarse. El CETA abre la puerta a la privatización de los servicios públicos, como sanidad, educación y agua.

Con más de 41.000 filiales de empresas de Estados Unidos en Canadá muchos ven al CETA como el caballo de Troya del

TTIP, comporta graves riesgos para nuestra sociedad al anteponer los intereses y privilegios de las grandes corporaciones multinacionales a las necesidades de las personas y del planeta.

Los antecedentes del CETA pueden rastrearse en las conversaciones de la cumbre Canadá-Unión Europea, celebrada en Ottawa en 2002, se reactiva en 2009, tras seis años de negociaciones en la sombra con una reducidísima participación del Parlamento Europeo y escasos actores sociales, el 26 de septiembre de 2014 se anuncia formalmente el fin de las negociaciones. Solamente en este momento, cuando el contenido ya estaba cerrado, se hizo público el texto de un acuerdo hasta ese momento mantenido en secreto. Casi dos años después termina la revisión jurídica del texto del CETA con cambios sustanciales en relación al texto previo en su versión definitiva publicada el 29 de febrero de 2016.

El tratado consta de 30 capítulos y, con los anexos, más de 1.500 páginas. La experiencia del Nafta, Tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y Méjico, llevó que Canadá perdiera entorno al 40% de su agricultura, una advertencia a los cantos de sirena en estos acuerdos.

Los apologistas del CETA prevén que en una década el producto interior bruto de la Unión Europea crecerá el 0,003% al 0,008%. Un estudio de la universidad de (inintel·ligible) ..., USA, en septiembre de 2016, predice todo lo contrario, que el PIB caería un 0,49% en la Unión Europea y en Canadá un 0,96. Y, lo que es más alarmante, un aumento del desempleo de 230.000 personas y un aumento de la desigualdad. También destaca este último estudio que ni todos los países, ni todos los sectores se afectaría por igual.

Podemos, al igual que numerosas organizaciones de la sociedad civil valenciana, ha expresado preocupación sobre las consecuencias que tendrá el CETA para nuestra economía, nuestros derechos y el medio ambiente.

En este sentido, en el Pleno de 10 de mayo de 2016, el síndico de nuestro grupo parlamentario realizó una pregunta al presidente Ximo Puig, que si el Consell había realizado o pensaba realizar una evaluación del impacto social y económico en el País Valenciano por la posible puesta en marcha del TTIP y del CETA. El presidente, Ximo Puig, indicó que ya se estaba trabajando con universidades y anuncio ya hace un año, el 10 de mayo de 2016, para refrescar la memoria de sus señorías, la creación de un grupo de trabajo permanente con las universidades valencianas para evaluar la repercusión del TTIP-CETA en todos los ámbito tanto económicos como del modelo social europeo.

El presidente en esta ocasión dijo que compartía la preocupación expresada por amplios sectores europeos y manifestó que nosotros tenemos también líneas rojas. En primer lugar, reforzar los derechos laborales; en segundo lugar, velar por el sistema de arbitraje; en tercero, la ratificación de los acuerdos medioambientales internacionales; cuarto, exclusión de la privatización de los servicios públicos; quinto, mantenimiento de las cuentas tarifarias de exclusión de los productos agrarios, especialmente sensibles; sexta y última línea roja que sitúa el presidente sería el reforzamiento y la regulación de los mercados financieros y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Y finalizaba diciendo que estas Corts han de tener conocimiento a los informes que los expertos

hagan, defendiendo siempre el interés general de las y los valencianos.

En estas Cortes se volvió a tratar el tema del CETA en la PNL presentada por Podem, con las enmiendas aceptadas del Grupo Socialista, y que fue aprobada en las Cortes en la sesión de 21 de septiembre de 2016, donde se instaba al Gobierno de España a realizar informe de impacto económico, social y ambiental e informe previo si el tratado contraería alguna legislación europea o española.

Numerosos ayuntamientos en toda la geografía valenciana, sindicatos, asociaciones de consumidores, agricultores, colegio de médicos, asociaciones en defensa de la sanidad pública y un largo etcétera, han expresado su inquietud y hasta oposición por las consecuencias del CETA para nuestra comunidad. Pero los tiempos se aceleran cuando el 15 de febrero de este año el Parlamento Europeo ratifica el acuerdo CETA y abre los procesos de ratificación en los distintos estados miembros.

En España, el gobierno Rajoy ha remitido el proyecto de ley para la ratificación del CETA al Congreso de Diputados el 27 de marzo. Rajoy intenta acelerar el proceso obviando el estudio y sus implicaciones, demostrando una vez más su subordinación al Ibx y Merkel del que se afana en ser el alumno privilegiado.

El Grupo Parlamentario Unidos-Podemos, en Común Podemos y Marea ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados un debate sobre la inconstitucionalidad del controvertido tratado, postura similar a la defendida por la mayor organización de jueces alemanes y por legisladores del parlamento francés y del parlamento alemán.

Por eso tenemos que indicar desde Podemos seguimos preocupados y el reloj está corriendo. Son demasiados los puntos de controversia, demasiados los sectores y entidades que pueden verse afectados, demasiados los derechos laborales, sociales y ambientales el riesgo de ser recortados y armonizados a la baja y demasiado los colectivos que se han alzado en su contra como para justificar una información necesaria y precisa.

Es por eso, señor *conseller*, que le hacemos la interpelación y le pregunto: ¿qué impacto tendría para los intereses valencianos la entrada en vigor del CETA y qué actuaciones ha realizado su *conselleria* al respecto?

Gracias. (*Aplaudiments*)

La senyora vicepresidenta primera:

Muchas gracias, señor Geffner.

Senyor conseller, per huit minuts.

El senyor conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball:

Gràcies, presidenta.

Gràcies, senyor diputat.

Senyories.

També he de dir que gràcies per esperar-se fins al final, perquè la veritat és que per al qui els parla ha sigut una vesprada prou pesadeta. I els ho dic amb el cor en la mà per si poden fer alguna cosa per poder reestructurar açò d'una altra manera.

Com vosté molt bé ha exposat, després de set anys de negociacions entre la Unió Europea i Canadà, el 15 de febrer de 2012, el Ple del Parlament Europeu va aprovar el Tractat de Lliure comerç i inversions entre la Unió Europea i Canadà, el CETA.

El CETA entra en vigor provisional aquesta primavera a l'espera que els parlaments de cada nació donen llum verda a la seua aplicació definitiva. El CETA conté mesures per eliminar les barreres al comerç entre ambdues economies i fixa les normes que regiran els futurs intercanvis, les seues modalitats, límits i garanties; es regula l'accés als mercats de béns i serveis, les tarifes duaneres, la participació d'empreses estrangeres en els concursos públics i el reconeixement dels títols professionals. També s'estableixen els estàndards de protecció alimentària, sanitària o medi ambiental a respectar i s'ha inclòs un capítol sobre desenvolupament sostenible, una de les parts més extenses i polèmiques és la que arreplega les garanties per a la protecció dels inversors a un costat i a l'altre de l'Atlàntic.

Pel que fa als seus efectes existeixen tant moviments a favor com en contra. Per una part, segons la comissió europea, en un estudi publicat en 2011, indica que l'acord tindrà un impacte positiu sobre l'economia amb un creixement del PIB de la Unió Europea del 0,03%, com vosté ha dit, i del 0,07% en el cas de Canadà. L'establiment del lliure comerç permetrà l'eliminació de nombrosos obstacles aranzelaris que dificulten els intercanvis per a les empreses, calculant-se un estalvi per als exportadors de béns industrials del voltant 470 milions d'euros a l'any, a l'hora que s'incrementaran les exportacions bilaterals de béns i serveis en un 23%.

A més, aquest acord facilitarà l'accés de les empreses de la Unió Europea als contractes públics canadencs, obrirà el mercat de serveis i oferirà millors condicions als inversors, contribuirà a prevenir la reproducció il·legal de les innovacions i dels productes tradicionals de la Unió Europea, incrementant la cooperació normativa i la protecció de les innovacions i dels productes tradicionals europeus.

Els objectius de l'acord estan en relació amb l'estratègia Europa 2020, de la Unió Europea, per a impulsar el creixement de l'economia, potenciant uns mercats més competitius, oberts i justos a tot el món.

Les empreses transnacionals no podran atacar aquests principis fonamentals que regeixen les polítiques europees. Per exemple, l'acord no afectarà les normes alimentàries ni de medi ambient de la Unió Europea. Els productes canadencs, sense cap excepció, no podran importar-se i vendre's en la Unió Europea si no respecten plenament la mateixa normativa. Amb la qual cosa, es mantenen les restriccions que aplica la Unió Europea als organismes genèticament modificats o a la carn de boví amb hormones de creixement.

No obstant açò, aquest acord ha sigut molt criticat per diverses raons. En primer lloc, es considera que el CETA no ha sigut un acord transparent, ja que es va negociar en secret des de 2009 a 2014.

D'altra banda, el creixement addicional a què donarà lloc l'acord, és molt reduït. I és probable que s'incremente la desigualtat i es produïska pèrdua d'ocupacions en tota la Unió Europea, sense tenir-se en compte la qualitat de l'ocupació, ja que, a pesar que les autoritats canadenques han promés ratificar els principals convenis laborals de l'OIT, el CETA no proporciona cap mecanisme addicional per a la protecció dels drets laborals.

També suscita controvèrsia el tema dels estàndards de seguretat alimentària. Un estudi desenvolupat pel Consell de Canadà, juntament amb altres institucions europees, assenyala les diferències normatives entre ambdues regions, la qual cosa pot posar en perill la seguretat dels aliments i els estàndards de producció d'Europa.

Un altre punt molt qüestionat és l'arbitratge a favor de les empreses. El sistema de tribunal d'inversions estableix normes d'arbitratge especials perquè els inversors estrangers puguen demandar els estats, si alguna llei és contrària als seus interessos, i dirimir els conflictes, sense passar pels tribunals de cada país.

Així, encara que els governs tenen dret a regular, per exemple, prenent decisions per a protegir la salut pública o el medi ambient, es pot denunciar als governs davant dels tribunals d'arbitratge d'inversió especials.

Respecte als serveis públics, el tractat exigeix que es tracte com a iguals a les empreses estrangeres, de manera que no es podrà afavorir la producció local i es tem que acaben prevalent els interessos corporativistes sobre les necessitats dels europeus i es fomenta la privatització.

En definitiva, el tractat de lliure comerç entre Canadà i la Unió Europea és més que una simple rebaixa d'aranzels, ja que contempla, a més a més, normes tècniques, mediambientals i laborals, mesures sanitàries i fitosanitàries, accés a la contractació pública, s'estableixen les regles de la propietat intel·lectual, així com la competència de tribunals d'arbitratge com a mètode de resolució de conflictes entre una empresa privada i un estat, fet que socava la sobirania dels estats.

Pel que fa a l'impacte directe que podria tindre el CETA al nostre territori, a hores d'ara no es podrà determinar, fins al cap d'un temps de la seua posada en vigor. La Comunitat Valenciana és la quarta autonomia espanyola que més vendes realitza a Canadà, amb més de cent cinquanta milions a l'any. I l'eliminació d'aranzels reduirà costos a les 1.227 empreses valencianes que exporten a aqueix país, sobre tot des dels sectors valencians clau, com alimentació, moble, calçat, automòbil o tèxtil.

En alimentació, es crearan oportunitats per a fruites, verdures, vins o transformats d'aliments. 26 de les 145 denominacions d'origen que protegeix l'acord són espanyoles; l'acord comercial protegeix els cítric i el torró de Xixona, a més d'altres productes espanyols, com l'oli d'oliva, formatges o pernils.

La Unió Europea i Canadà han acordat acceptar mútuament els seus respectius certificats d'avaluació de conformitat en àmbits com els joguets, els aparells elèctrics, el material electrònic, els de ràdio, la maquinària o l'equip de mesurament.

El que ha de tindre vosté clar és que la política del Consell sempre anirà per la defensa decidida de les empreses valencianes, de la seua competitivitat, de la seua internacionalització, però també, en definitiva, del benestar de les persones, que són les destinatàries últimes de les polítiques públiques.

Moltes gràcies. *(Aplaudiments)*

(Ocupa la presidència el vicepresident segon, senyor Alejandro Font de Mora Turón)

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor conseller.

Para réplica, señor Geffner...

El senyor Geffner Sclarsky:

Gracias, señor presidente.

Bien, aunque estemos cansados, yo creo que la contestación ha sido demasiado escueta, ¿eh? Escueta en el sentido que el presidente se había comprometido en crear un grupo de estudio de las repercusiones para la economía y la sociedad valenciana de la implantación de la entrada en vigor en el CETA. Con lo que me ha comentado usted, pues, yo creo que todavía estará por constituirse esa comisión.

Entonces, creo que el impacto que va a tener es un impacto de gran calado. Porque aquí, si uno entra en la página, como he entrado hoy, para revisar el instituto Elcano, solo es un canto de sirenas de las ventajas que va a determinar este libre comercio: habrá más riqueza, seremos todos más altos, más guapos y saldremos bien parados. Pero hay experiencias, experiencias históricas, que ya llevan más de quince años, como NAFTA.

El comercio que se basa en dar privilegios a las grandes corporaciones genera problemas, genera desigualdad, genera que la agricultura sea uno de los sectores más comprometidos.

Y aquí, concretamente, por ejemplo, tenemos el caso de la ganadería valenciana, ¿eh?, los cerdos, que, en principio, el sector de ganadería más importante que hay en la comunidad es de los cerdos. Y, teóricamente, Canadá aportaría unas entradas de 75.000 toneladas anuales en carne porcina, que pudiera afectar, porque están a un precio menor, un 30% más baratos que los de la Unión Europea, y podría perjudicar al sector, un sector que está localizado en la zona de interior. Cosa típica de estos acuerdos. Aumenta la desigualdad no nada más en la sociedad, generando desempleo, sino que también las zonas que tendrían que estar protegidas,

las zonas rurales, la zona de interior, pues, ante el rodillo del libre mercado con una industria agroalimentaria de gran envergadura norteamericana, pues, tendrá serias dificultades para sobrevivir en las condiciones actuales.

Ha indicado que se respetan las indicaciones geográficas protegidas, también para el campo. Solo el 9%. Hay 1.600 indicaciones geográficas protegidas, y solo se respetarán 143, que significa el 9% de todas.

Los productos agropecuarios, pues, entrarán aquí, porque este es un acuerdo vivo, es un acuerdo que puede cambiar las regulaciones, lo más importante. Por ejemplo, los organismos modificados genéticamente, que ahora están prohibidos aquí para la alimentación humana, pero tenemos que tener en cuenta que en Canadá, pues, es uno de los sectores más importantes en cuanto a su producción agraria.

Finalmente, quiero decir que lo más cuestionado, y que tres millones y medio de europeos han dado su apoyo a la iniciativa europea, es contra estos tribunales especiales que generan honda preocupación y cuestionamiento de si eso un estado de derecho puede aceptarlo, que haya dos tribunales distintos: uno para la gente normal y las empresas del territorio; y otro para los inversores extranjeros, que tendrán una situación de privilegio, una situación de privilegio, que serán juzgados por unos tribunales en donde los jueces les pagan por el acto de serlo, por el número de procesos que hacen y no son especializados en derechos humanos, en respeto medioambiental ni en derechos laborales, solo en derecho mercantil.

Por lo tanto, desde Podemos, no aceptamos la pasividad del gobierno. Querríamos que el País Valenciano tuviera esa posición que el parlamento catalán ha hecho hace poco, de posicionarse en contra de esto, nuevamente, y ser como los valones que fueron Astérix, que se opuso a que este acuerdo llegue a plasmarse.

Desde Podemos estaremos haciendo todas las medidas posibles para que se tengan en cuenta los intereses de los valencianos y las valencianas y que no primen los intereses de las grandes multinacionales,...

El senyor vicepresident segon:

Muchas gracias.

El senyor Geffner Sclarsky:

...que son los que han diseñado este traje, que ahoga a la sociedad...

El senyor vicepresident segon:

Señor Geffner...

El senyor Geffner Sclarsky:

..., recorta derechos, ahoga a la democracia y crea tribunales privados.

Gracias. (*Aplaudiments*)

El senyor vicepresident segon:

Muchas gracias, señor Geffner.

Senyor conseller, per a finalitzar este tema i la jornada, i la maratoniana jornada del conseller que establix la Junta de Portaveus, (*rient*) on n'hi ha un representant del govern.

El senyor conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball:

(*Rient*) Molt bé, molt bé.

Bé, moltes gràcies, president.

Moltes gràcies per la rèplica, senyor diputat.

Vaig a dir-li que les mesures que hem adoptat la conselleria, no?, la conselleria d'economia sostenible, que el primer que ha fet ha sigut instar el govern central, en el compliment de la resolució 831 d'aquesta legislatura, que es va aprovar ací, a Les Corts, a no autoritzar el CETA sense realitzar una anàlisi detallada que avalue totes les seues possibles repercussions, al fet que inste la Comissió Europe a no signar un aplicació provisional del CETA y que espere al fet que tots els procediments de ratificació dels estats membres es duguen a terme o al fet que sol·licite el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la compatibilitat del CETA amb els tractats de la unió i que no ratifique l'acord fins a no disposar del citat dictamen. És a dir, això està en Madrid, anem a vore què el que ens diuen al respecte.

Però, a banda d'això, no podem estar quietos. Som govern. Hem de defendre els interessos, com he dit abans, de les empreses valencianes i, per *ende*, hem de defendre els interessos de la gent que viu a aquest territori.

I dir que estem fent algunes accions, algunes accions perquè no ens pille el tren, per si tot açò va endavant.

I dir que s'ha inclòs Canadà entre els països seleccionats com a prioritaris, 2017-2019, en les accions de promoció de la internacionalització de les nostres empreses.

Es preveu el suport a les empreses interessades en aqueix mercat, mitjançant l'engedada en el futur d'una delegació de l'lvace, si és el cas, en aqueix mercat.

Convocatòria de beques que tindran, com a destinació, les oficines comercials d'Espanya en el mercat de Canadà.

A més, i a conseqüència dels últims esdeveniments que s'estan produint en l'escenari internacional, com el *bretxit* o l'arribada de Trump a la presidència dels Estats Units, i que poden afectar l'evolució de les nostres exportacions i en la producció i en el

manteniment dels llocs de treball, he de recordar-li altres actuacions que hem anat fent des de la mateixa conselleria, com es reunió amb les associacions empresarials. El passat 9 de desembre ens vam reunir, junt a la conselleria d'agricultura i amb les associacions empresarials dels sectors més exposat al mercat nord-americà i britànic, per tractar els nous escenaris comercials.

També estem treballant una estratègia de comunicació dirigida a enfortir la imatge de la Comunitat Valenciana. Esta imatge de comunicació volem, torne a repetir, que siga forta, potent i que ens ajude per a destacar la seua idoneïtat com a destí d'inversió.

Estem incrementant també les delegacions exteriors. Reforcem el nombre de destins d'exportació. I anem a comptar amb una major diversificació de mercats, especialment en els mercats emergents i amb més dinamisme; passarem de 21 a 30 oficines en la delegació exterior.

I una altra acció. Dir-li que estem elaborant un estudi dels productes que més s'exporten i importen amb Canadà, per tal de fer una comparativa i veure com afecta l'eliminació dels aranzels a aquests productes.

També s'analitzaran aquells productes que més estaven taxats i que no s'exportaven fins ara, per veure si ara ja tenim un avantatge comparatiu respecte al mercat canadenc. Amb tot això, s'informarà les associacions sectorials per tal que donen difusió per treballar de manera conjunta.

Com pot vore, estem en una posició d'alerta, alhora que proactiva davant dels nous escenaris comercials que s'estan produint, amb la finalitat, com ja li he dit abans, de donar suport a totes i cadascuna de les empreses de la nostra terra.

Moltes gràcies. *(Aplaudiments)*

El senyor vicepresident segon:

Moltes gràcies, senyor conseller. Moltes gràcies.

Voldria recordar, abans de finalitzar esta sessió, que demà la Junta de Portaveus es reunirà a les nou i mitja del matí, per a tractar temes relatius a comissions.

I ara suspenem la sessió fins demà, a les deu del matí. *(El vicepresident segon colpeja amb la maceta)*

(Se suspén la sessió a les 20 hores i 36 minuts)

D'acord amb l'article 18.2 del Reglament de les Corts, s'indiquen les senyories assistents a la sessió:

Almería Serrano, José Francisco
Álvaro Cerezo, Mònica
Andrés Sanchis, Concha
Argüeso Torres, Emilio
Arqués Cortés, Vicent

Bachero Traver, Belén
Barceló Chico, Ana
Bellver Casaña, Jorge
Bernal Talavera, María
Bertomeu Vallés, Antoni
Betoret Coll, Vicente
Boix Pastor, Alfred
Bonig Trigueros, Isabel
Briet Seguí, Rafael Francisco
Caballero Hueso, Mercedes
Caballero Montañés, Juan Carlos
Cabedo Laborda, Cristina
Campello Moreno, Marian
Calpe Saera, José Ramón
Casanova Claramonte, Vicente
Castelló Sáez, Alfredo
Cerdán Pastor, David
Císcar Bolufer, José
Climent González, Rafael
Córdoba Cortijo, Juan Ginés
De Miguel Martínez, David
Díaz González, Elisa
Domínguez Pérez, Miquel
Escrig Monzó, María Sabina
Estañ García, Antonio
Ferrer Matvieychuc, Graciela Noemí
Ferrer San Segundo, María José
Ferri Fayos, Fran
Font de Mora Turón, Alejandro
Gallén Peris, Marta
García González, Rosa María
García Jiménez, María José
García Latorre, Francisco Javier
García Muñoz, Teresa
García Salvador, Alberto
García i Tomàs, Víctor
Garrigues Francés, María Blanca
Gascó Enríquez, Beatriz
Gascó Verdier, Beatriz
Geffner Sclarsky, Daniel
González Delgado, Fernando
Hernández Sánchez, Noelia
Ibáñez Bordonau, Rubén
Jiménez Doménech, César
Juan i Huguet, Jordi
Marcos Puig, Verónica
Marí Malonda, Alexis Frederic
Martín Pérez, Sandra
Martínez Ramírez, Carmen
Marzà Ibáñez, Vicent
Mata Gómez, Manuel
Meco Tébar, Fabiola
Mínguez Corral, Sandra
Mollà Herrera, Mireia
Montiel Márquez, Antonio
Morera i Català, Enric
Mulet Taló, Miguel Ángel
Muñoz Lladró, José
Mustafá Ávila, Rosa de Falastín
Nadal Sendra, José Ramón
Navarro Caballero, Juan de Dios
Navarro Casillas, Isaura
Ortega Requena, Maria Josep
Ortiz Vilella, Eva
Pallarès Piquer, Marc

Pastor Llorens, Fernando
Peremarch Palomares, Covadonga
Pérez Fenoll, Manuel
Pineda Cuenca, Manuel
Ponce Guardiola, Juan
Quiñonero Hernández, Llum
Rodríguez Armigen, Cristina
Rojo Sánchez, Domingo
Salas Maldonado, José
Sánchez Zamora, María del Carmen
Santamaría Ruiz, Luis

Serna Serrano, Toñi
Soler Beneyto, Víctor
Subías Ruiz de Villa, Juan Ignacio
Subiela Chico, Antonio
Tirado Museros, Clara
Tormo Moratalla, Emigdio
Torres García, David
Ventura Campos, Mercedes
Woodward Poch, Antonio Joaquín
Yáñez Motos, María Remedio
Zaplana López, José Juan

DIARI DE SESSIONS DE LES CORTS VALENCIANES

Subscripcions: Servei de Publicacions de les Corts
subscripcions@corts.es

Plaça de Sant Llorenç, 4 • 46003 València

Telèfon: 96 387 61 00

<http://www.cortsvalencianes.es>

Edita: Servei de Publicacions de les Corts

ISSN: 1133-2492

Dipòsit legal: V-1013-1983



CORTS VALENCIANES

DIARI DE SESSIONS DE LES CORTS VALENCIANES

Subscripciones: Servicio de Publicaciones de Les Corts
subscripcions@corts.es

Plaza de San Lorenzo, 4 • 46003 Valencia

Teléfono: 96 387 61 00

<http://www.cortsvalencianes.es>

Edita: Servicio de Publicaciones de Les Corts

ISSN: 1133-2492

Depósito legal: V-1013-1983